

Graves amenazas a la democracia y a los derechos humanos en Brasil

Brasil tiene una historia marcada por la dependencia externa, profundas desigualdades sociales, el racismo y por una política oligárquica. En consecuencia, a lo largo del siglo XX tuvimos siempre más crecimiento económico que humanización de la vida.

La derrocada de la dictadura militar en la década de 80 y la adopción de una nueva constitución, abrió espacio para la promoción de una serie de medidas que visaban la inclusión social y la creación de un espacio más democrático. Pero la convivencia entre grupos políticos centrados en las demandas de los grupos excluidos y grupos alineados con las elites económicas jamás ha sido fácil - Los pocos gobiernos brasileños efectivamente comprometidos con la igualdad, con la democracia y la soberanía, sufrieron una brutal oposición de las clases dominantes. Es en este contexto que se inserta el golpe parlamentario, mediático y judicial que derroca a la presidente Dilma Rousseff en 2016.

El gobierno de facto, instalado desde entonces, viene patrocinando y apoyando un conjunto de mudanzas centradas en una agenda de austeridad fiscal fuertemente apoyada por elites conservadoras, cuyos resultados principales son la destrucción de las conquistas de la Constitución de 1988 y de las leyes complementares que consolidaran la constitucionalidad democrática.

En solamente dos años, la protección de los derechos humanos ha sufrido dramáticos retrocesos en Brasil. No solamente se han eliminado las garantías constitucionales a los gastos sociales en educación y salud como se han abandonado agendas fundamentales para la protección de grupos marginalizados como las agendas de protección y promoción de derechos de los afro descendientes (que constituyen mitad de la población), los pueblos indígenas, los niños, niñas y mujeres.

El resultado práctico de estas acciones es un creciente estado de mal estar social, que se traduce, entre otros ejemplos, en el desempleo y la reducción de la masa salarial, el creciente número de excluidos por los centros de las grandes ciudades brasileras, el regreso del hambre en las periferias, la violencia en todas sus expresiones, el crecimiento del machismo y la homofobia, en la retórica fascista que inunda las redes sociales. (Datos en anexo.)

El hecho que tan graves cambios de legislación y políticas publicas fueran sean implementados por un gobierno que no ha sido legitimado por elecciones exacerba el cuadro de tensión. La creciente hostilidad política y la frecuente omisión de la justicia en la defensa de grupos tradicionalmente marginalizados contribuyen con la violencia

grave y la impunidad. Brasil en 2017 fue el país en el mundo con mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos. La violencia policial y la exposición de la población carcelaria a condiciones terribles siguen siendo frecuentes.

La brutal y aun no explicada muerte de Marielle dos Santos, una joven y brillante activista de derechos humanos, representando múltiples voces de grupos marginalizados en las favelas de Rio, es probablemente el símbolo más fuerte de la violencia y de la debilidad de la democracia en Brasil. Esta violencia tiene un mensaje claro: Hablar por los marginalizados implica en serios riesgos. Defender a los derechos de los pobres, los excluidos es enfrentar estructuras de poder que intimidan sea por medio de la violencia directa como por medio de la intimidación judicial.

Y es en este contexto perturbador que Brasil camina para una elección en que uno de los principales candidatos podrá ser excluido por medio de la interferencia del sistema de justicia. La inusualmente rápida e claramente injusta sentencia en contra el presidente Lula es probablemente el evento político más importante en Brasil desde el golpe del *impeachment* en contra la presidente Dilma Rousseff. Las investigaciones sobre corrupción han confirmado problemas estructurales en las formas de financiación de la política como un conjunto. Todavía, fuerzas conservadoras predominantes en el poder judicial han logrado asegurar fuerte protección a grupos políticos de derecha afectados por denuncias y una desproporcional y, por veces, injusta persecución a representantes de la izquierda.

La iglesia y la tradición católica en Brasil han siempre tenido un rol fundamental en la creación de una consciencia democrática y en la sensibilización para los temas de derechos humanos en todos los periodos históricos. Tales fuerzas siguen presentes y colaborando en la defensa de las conquistas hoy puestas en riesgo.

La superación de la crisis brasileña tomará tiempo. Reconstituir el espacio de diálogo y la confianza en las instituciones estatales será ahora una tarea extremadamente compleja en Brasil. La judicialización de todos los temas de la política está debilitando el debate y fuerzas anti democráticas han ganado un preocupante espacio nunca antes visto.

Para el momento más inmediato es fundamental poner toda atención a los ataques en contra grupos marginalizados y condenar toda forma de violencia. Es importante también llamar la atención para los riesgos que se crean cuando se abandona una agenda de inclusión social, económica y política, tal como la establecida por el marco constitucional de 1988 y por la agenda de derechos humanos

A continuación indicamos algunos ejemplos.

1- Volviendo al mapa del hambre

El *Mapa del Hambre*, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relaciona todos los países donde más del 5% de la población tiene una ingesta menor a la cantidad de calorías mínimas necesarias. En 2014, después de años de esfuerzo, Brasil había conseguido salir del Mapa. Desde el golpe, el hambre volvió a crecer, como resultado del crecimiento de la extrema pobreza, de la reducción de las políticas de protección social y del desempleo creciente.

2- Crecimiento de la extrema pobreza y de la pobreza

Es considerada en situación de extrema pobreza la población que percibe una renta domiciliar per cápita mensual de hasta R\$70,00 (€ 15,00). Entre 2001 y 2014, Brasil redujo el número de personas que viven en extrema pobreza. Ese número volvió a crecer y hoy ya estamos al mismo nivel que en 2005.

Además de la extrema pobreza, aumenta también el número de personas pobres, o sea, aquellas que poseen una renta per cápita mensual de hasta R\$ 140,00 (€ 30,00).

3- Reducción de las políticas sociales

Desde 2016, hubo una reducción en los presupuestos dedicados a programas sociales. Se constituye lo que los especialistas vienen denominando como “estado de desprotección social”. El propio gobierno divulgó que 1,5 millones de familias fueron recortadas del programa Bolsa Familia. Más recortes vendrán, inclusive porque el gobierno propuso, y el Congreso Nacional aprobó, una enmienda constitucional que determina un congelamiento en los gastos sociales por 20 años.

Después de golpe se interrumpieron todos programas de habitación social. Ninguna casa nueva fue construida para sectores más pobres.

4- Aumento del desempleo

El actual gobierno asumió el 12 de mayo de 2016. Desde entonces y hasta hoy, el desempleo viene creciendo. Los datos más recientes apuntan que hay más de 14 millones de desempleados en Brasil. Desde mayo de 2016, el índice aumento a 2,8 millones en números absolutos (1 millón perdieron sus empleos y 1,8 millones fueron forzados a buscar otro empleo para compensar la renta familiar). Y sumado a los jóvenes, hoy hay 28 millones de personas procurando empleo.

5- Reducción de poder de compra del salario mínimo

La constitución brasilera establece que todos los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo, fijado por ley, nacionalmente unificado, capaz de atender las sus necesidades básicas y de su familia, con casa, alimentación, educación, salud, ropa, higiene, transporte, vacaciones y jubilación. Pero en la práctica, más de 40 millones de personas reciben menos que un salario mínimo. Además, el valor del salario mínimo es menor que el necesario para garantizar los derechos constitucionales. Desde comienzos del milenio, venía ocurriendo una lenta

recuperación del valor real del salario mínimo. Esta recuperación fue interrumpida con el golpe de 2016. Hoy, el salario mínimo oficial de Brasil es de R\$ 954,00; casi el 25% del valor mínimo necesario para garantizar la vida de una familia de cuatro personas, o sea, una renta mensual de R\$ 3752,65.

6- Aumento del número de personas en situación de calle.

El Brasil tiene más de 100.000 personas viviendo en situación de calle. La mayor parte de ellas en las grandes ciudades. Además, gran parte de la población brasilera vive en condiciones habitacionales precarias, inclusive por la falta de servicios públicos básicos, como agua y saneamiento. Esta situación venía siendo revertida lentamente en los últimos años. Desde el golpe de 2016, las políticas habitacionales fueron reducidas; al mismo tiempo, viene creciendo el número de personas forzadas a vivir en las calles. Solo en Río de Janeiro, el número de personas en situación de calle creció un 150%.

7- Crisis de salud

Brasil tiene un Sistema Único de Salud, creado por la Constitución de 1988. El sistema prevé que los tres niveles de gobierno (nacional, estadual y municipal), respondan por su gestión y financiamiento. En general, los gobiernos invierten en salud menos que lo previsto por Ley. En 2018, el gobierno federal destinó 3,6% del presupuesto federal para salud. La media mundial, según la OMS, fue de 11,7%. En Europa, la proporción es de 13,2%. En Suiza, del 22%. La inversión en salud en Brasil, es inferior a varios países de América del Sur, como Argentina o Chile. Desde 2016, el gobierno de facto ha empeorado la situación, por ejemplo, afectando el Programa “Más Médicos”, creado en 2013 en asociación con la Organización Panamericana de Salud.

8- Crisis en la educación

Más de 40 millones de estudiantes frecuentan las escuelas públicas de Brasil, desde el nivel fundamental al superior. Desde 2016, el gobierno federal adoptó un conjunto de medidas que afecta la calidad, el mantenimiento y la expansión del sistema público de educación, desde la reducción de inversiones hasta estímulos hacia la privatización del sector. Cerca de 170 mil estudiantes universitarios abandonaron sus estudios después del golpe, porque no tienen como mantenerse en la universidad.

9- Aumento de los combustibles

Los precios de la gasolina, del etanol, del diésel y del gas impactan no solo en los costos de las empresas, también en el costo de vida de las personas, en el transporte para el trabajo y la escuela, y también en el precio del gas. Por esto, muchas familias pobres comenzaron a cocinar utilizando alcohol común. El resultado es un creciente número de personas hospitalizadas para tratar quemaduras de segundo y tercer grado. Desde 2016, el gobierno federal cambió la política de precios de los combustibles: además del aumento, los ajustes llegaron a ser diarios.

10- Crecimiento del malestar social

Todos los datos indican: la vida del pueblo brasileiro empeoró desde mayo a 2016. Y, de no haber cambios inmediatos y profundos en la política económica y la política social del Estado Brasileiro, la situación va a empeorar mucho más.

11- Aumento de la violencia en las prisiones

Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria en el mundo, 711.463 siendo 32% de ellos sin sentencia. Por cuenta de la impunidad del poder judicial y los gobernantes, la Policía ha aumentado su accionar violento en las periferias de las ciudades, afectando siempre a los jóvenes, negros y más pobres. La prisión del presidente Lula fue hecha en contra de la Constitución que dice que nadie puede ser encarcelado, salvo en caso de delito *in fraganti* o habiendo pasado todos los recursos. Solo en São Paulo fueron presas más de 13 mil personas, que estaban esperando juicio en libertad por falta de recursos.

Brasil tiene una media de 55 mil personas asesinadas por año. Y en el campo, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), fueron asesinados 77 dirigentes en 2017, duplicando la media anual del periodo Lula-Dilma.